

Talca, seis de julio de dos mil veintiuno.-

VISTO:

Don David Bahamondes Bardé, abogado, defensor penal público, en representación de **PEDRO ESTEBAN INOSTROZA INOSTROZA**, presenta recurso de nulidad en contra de la sentencia de fecha 22 de mayo de 2021, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes, en Causa RIT 20-2021 de ese tribunal, RUC 1900490814-K, que lo condenó a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo y accesorias, como autor del delito consumado de robo con violencia calificado, previsto y sancionado en el Art. 433 N°3 en relación con los artículos 432, 436 y 439 del Código Penal, cometido en perjuicio de Miguel Wilfredo Hamame Ibarra, en su casa-habitación, el día 7 de mayo de 2019 en Parral.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurrente funda su recurso en la causal de nulidad contemplada en el Art. 374 letra e) del Código Procesal Penal, esto es : *"Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el Art. 342, letras c), d) o e).* Ello en relación con el Art. 342 letra c), que ordena incluir : *"La exposición clara, lógica y complete de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueron ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 297".*

Señala que para la valoración de la prueba rendida en juicio, nuestro sistema procesal penal adoptó el criterio de libre convicción o sana crítica racional, en que hay plena libertad de convencimiento, pero exige que las conclusiones sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoye. De ello surge la necesidad de fundamentación de las sentencias y la obligación de los jueces de proporcionar las razones de su convencimiento. A tal efecto, cita jurisprudencia y doctrina, de la que concluye que la valoración del tribunal a quo debe reflejarse en la sentencia mediante una secuencia que debe configurarse en dos momentos: el primero, de carácter descriptivo, donde se indica el contenido del medio de prueba; y, el segundo, de carácter crítico, evaluativo del medio de prueba. Ambos deben estar descritos en la sentencia pues, en caso de omitirse alguno de ellos, la sentencia resulta inmotivada y, por tanto, nula.



Segundo: Que, en cuanto a la forma en que la sentencia impugnada incurre en la causal invocada, ella dice relación con dos aspectos que, dentro de la misma, se plantean en forma subsidiaria:

a./ Inicialmente, sostiene omisión del requisito de la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, por cuanto el fallo condenatorio incurre en fundamentación falsa con relación al testimonio de la víctima, en lo que se refiere a la manera en que tiene por acreditada la preexistencia del dinero, objeto material del delito, transgrediéndose con ello el principio de la lógica de razón suficiente, ya que no está acreditado que la víctima tuviere en su poder alguna suma de dinero que hubiese sido sustraída y no se incorporó prueba documental que permitiere refrendarlo. Y, para tener por acreditada la preexistencia del dinero se basó en lo declarado por la víctima y por la testigo, cuñada de la víctima, doña María Teresa Maldonado González. Afirma que los falladores *pasan por alto* lo que la víctima declaró en el juico oral respecto de la fecha en que habría recibido la supuesta suma de dinero, pues no habría coincidencia entre la fecha declarada ante el fiscal de la causa - 5 de mayo de 2019- y lo señalado ante el tribunal donde se aludió al día de los hechos, 7 de mayo de 2019, por lo que las conclusiones a que arriba el sentenciador se basa en una inexacta reproducción de los dichos de la víctima. Por ello, considera afectado el principio de razón suficiente pues los acontecimientos no tienen una explicación racional y no se avienen con la circunstancia de que el tribunal hubiera tenido por ratificados lo dichos del Sr. Hamame con aquellos de la testigo Maldonado, dando por cierto que el dinero lo recibió el día 7 del mes indicado. Por ende, aduce, no se pudo tener por acreditado que la víctima, el día de los hechos, hubiera portado alguna cantidad de dinero y que ésta hubiere sido sustraída por el agente.

b./ Luego, afirma omisión del requisito de la letra c) del Art. 342 del Código Procesal Penal, con relación a artículo 297 del mismo, por cuanto el fallo condenatorio incurre en una fundamentación aparente desde que desatiende la prueba de coartada que descartaban la participación del imputado en el delito, a saber, la declaración de éste, los dichos del testigo de descargo Roberto Elgueta Segura y la prueba documental incorporada, con lo cual el tribunal condenó basándose no en pruebas sino en opiniones o valoraciones que el tribunal hace sin que esté suficientemente acreditado que el imputado haya participado en el ilícito. Para tal efecto reproduce la declaración del imputado y del testigo nombrado, concluyendo la imposibilidad de que Inostroza llegare desde el lugar de su trabajo, donde salía a las 18:00 hrs., hasta el lugar de los hechos, distante a unas 12 cuadras, en tan solo 3 minutos, sin dar garantía de veracidad al Registro de Asistencia existente en aquel, aunque fue ratificado por el imputado y el aludido testigo. Ello, afirma, implica una vulneración al principio de la razón suficiente, desde que deja a lo hechos desprovistos de explicación, lo cual conlleva la concurrencia de la causal de nulidad invocada. Con ello, se causó un agravio a su defendido al dictarse sentencia condenatoria por el delito consumado de robo con violencia calificado, en el cual se le atribuyó participación en calidad de autor.



Tercero: Que en relación al primer aspecto en el que se basa la causal alegada en forma principal, esto es, el cuestionamiento de la acreditación de preexistencia del dinero en poder de la víctima, situación que habría infringido el principio de razón suficiente, corresponde señalar que el análisis de la sentencia, especialmente sus Considerandos Octavo -donde se establecen los hechos y circunstancias que se dieron por probados- y Noveno -donde se hace la valoración de los medios de prueba que fundamentan aquellos- conduce a razonar en igual sentido a como lo hizo el tribunal de origen, dando credibilidad a la declaración de la víctima don Miguel Hamame Ibarra y la testigo María Teresa Maldonado González. Por demás, ello es coherente con una apreciación conforme a la sana crítica, puesto que, precisamente, la exclusión del móvil del robo resulta contrario a la aplicación de la lógica y las máximas de la experiencia, pues la agresión inmotivada deviene en un acto que, siendo de por sí irracional, sería además absurdo, más aún si lo es inmediatamente posterior a un acto de deferencia de la víctima que le proporcionó un vaso de agua para calmar su sed. De tal modo y no contrariándose de modo alguno la lógica aplicada, ha de desestimarse la impugnación referida pues el razonamiento del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes se ajusta a las reglas de la sana crítica.

Cuarto: Que en relación al segundo aspecto en que se basa la primera causal de nulidad, esto es, que el fallo condenatorio incurriría en una fundamentación aparente al desatender los medios de prueba de coartada que descartaban la participación del imputado en el delito, debe señalarse que la valoración de los medios de prueba que revela la sentencia no merece cuestionamiento por ser suficientemente razonada y haberse hecho cargo de toda la prueba producida, con lo cual los hechos y circunstancias que se dieron por probados aparecen debidamente respaldados y la convicción condenatoria debidamente justificada. Si bien, es loable el esfuerzo de la defensa por cumplir su labor, los planteamientos presentados no son justificación para una invalidación de la sentencia por reunir ésta cabalmente las exigencias establecidas en el Art. 342 del Código Procesal Penal, razón por la que la causal esgrimida habrá de ser desestimada.

Quinto: Que, en subsidio de la causal antes referida, el recurrente alega la causal de nulidad contemplada en el Art. 374 letra f), esto es: *“Cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción a lo prescrito en el artículo 341”*.

Señala que la última norma dispone que la sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación y que, en consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Afirma que tal no se ha respetado en el fallo impugnado, pues hay una diferencia entre la acusación formulada por el Ministerio Público y el hecho que se tuvo por acreditado en el fallo, consistente en el lugar físico concreto donde se habría producido el ataque a la víctima. En efecto, en la sentencia se dice que éste habría sido al interior de la vivienda, lo que no se encontraba consignado en el libelo acusatorio, desde que el mismo solo se limitó a indicar que el agente ingresó, sin señalar de manera



específica el lugar concreto al que habría entrado el hechor, ni aquel en que se habría producido el ataque, por lo cual dicho lugar no formó parte de la acusación del Ministerio Público, motivo por el cual la sentencia infringió lo establecido en el citado artículo 341, lo que doctrinariamente constituye afectación al principio de congruencia, en razón de lo que debe anularse el juicio oral y la sentencia recaída en él. Más aún, cuando trae aparejado un perjuicio mayor pues, al haberse tenido por acreditado que los hechos ocurrieron al interior de la casa-habitación de la víctima, se estimó concurrente la agravante del Art. 12 N° 18 del Código Penal, incrementándose el reproche penal, según lo expuesto en el Considerando Décimo Séptimo del fallo recurrido, al excluirse el grado mínimo de la pena y siendo radicada en 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio. Termina solicitando que, en mérito de la causal comentada, se anule el juicio oral y la sentencia dictada.

Sexto: Que el Considerando Primero de la sentencia establece los hechos y circunstancias que fueron objeto de la acusación, en cuya parte pertinente se señala que cuando el acusado Pedro Esteban Inostroza Inostroza concurrió hasta el domicilio de la víctima Miguel Wilfredo Hamame Ibarra, éste le abrió ingresando aquel. Luego, la sentencia da por establecido que la agresión se inició en el antejardín y, luego, el agresor avanzó con la víctima hacia el interior de la vivienda donde continuó agradiéndolo y exigiéndole la entrega del dinero. De ello se sigue que hay coincidencia entre lo señalado en la acusación y lo establecido en la sentencia, sin que ésta hubiere excedido el contenido de aquella, puesto que todos los hechos se cometieron al interior de la vivienda de la víctima.

Séptimo: Que, a su vez, la aplicación de la circunstancia agravante contemplada en el N° 18 del Art. 12 del Código Penal, aparece del todo procedente desde que tanto las lesiones como el robo se suceden al interior de la morada de la víctima, pues es indiscutible que el antejardín y luego, el interior de la vivienda, sitúan la ocurrencia del hecho en la aludida morada, la cual está constituida por el inmueble donde una persona habita personalmente junto a su familia directa.

Octavo: Que, por lo dicho en los dos considerandos precedentes, la causal de invalidación subsidiariamente alegada, también será desestimada, al igual como lo será la primera presentada en forma principal, como se resolverá.

Por lo señalado, normas legales citadas y lo dispuesto en los Arts. 372, 374, 376, 378 y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad presentado por la defensa del condenado PEDRO ESTEBAN INOSTROZA INOSTROZA, en contra de la sentencia de fecha 22 de mayo de 2021, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes, en Causa RIT 20-2021 de dicho tribunal, RUC N° 1900490814-K, la que, en consecuencia, no es nula. No se condena en costas a la parte recurrente en atención a la privación de libertad que lo afecta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.



Redacción del abogado integrante don Abel Bravo Bravo.

Rol de Ingreso N° 545-2021 / Penal.



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Suplente Alvaro Andres Saavedra S., Fiscal Judicial Oscar Lorca F. y Abogado Integrante Abel Bravo B. Talca, seis de julio de dos mil veintiuno.

En Talca, a seis de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>